

LÍDERES SOCIALES. ¿POR QUÉ LOS MATAN?

La de Colombia es una situación cada vez más compleja. Hablamos de posconflicto en momentos en que más exacerbada está la confrontación armada.

La cotidianidad colombiana es el conflicto. Primero fueron los pájaros, luego los chulavitas, más tarde vinieron los bandoleros, después los llamados guerrilleros, ahora son las águilas negras... las bacrim, los elenos...

La de este país es una guerra que comienza, con cada confrontación que termina. ¿Los mismos con las mismas? seguramente no son los mismos, pero de manera extraña siempre son las mismas. Quiero decir, no son los mismos actores, pero son las mismas causas, los mismos motivos, los mismos móviles, los mismos intereses una y otra vez reivindicados y perseguidos.

La comprensión de las guerras exige saber cuáles son sus orígenes, cuáles son su métodos y motivaciones. Solo de esa manera es posible construir una paz duradera y estable. No proceder de esta manera es seguir condenados al infierno de la incertidumbre de una guerra sin sentido.

Con una recurrencia sintomática, en Colombia se habla de manera persistente del posconflicto como si atrás hubiera quedado el conflicto. No hay tal. Sin duda se ha puesto fin a la confrontación armada con una organización armada ilegal que por más de medio siglo parasitó los campos colombianos. Pero la guerra aún no termina porque otros actores persisten en el ejercicio de la política del fusil. El diálogo de la sangre.

La insurgencia de las FARC-EP, en una buena proporción se desmovilizó y hace sus mejores esfuerzos por retornar a la vida civil. No ha sido nada fácil. La implementación de los acuerdos no termina de agradar al nuevo gobierno.

Los pirómanos verbales, sueñan con hacerse a una ley del talión mejorada, según ellos, se entiende mejorada estableciendo un modelo punitivo que contenga dos ojos por un ojo, dos cabezas por una cabeza, dos muertos por un muerto y, así, sucesivamente.

En medio de este panorama enrarecido, el país asiste sin estupor ni vergüenza a una masacre lenta pero consistente e insufrible de líderes sociales. Se trata de hombres y mujeres humildes que se dedican a acompañar a su comunidad como dirigentes campesinos, miembros de acciones comunales, indígenas, afrodescendientes o defensores de derechos humanos.

Los están matando. La defensoría, de manera infructuosa ha desplegado los sistemas de alertas tempranas sin que se haya logrado evitar casi ninguno de los atentados. El Estado, tan exitoso en el control de las ventas ambulantes y de conductores despistados, no tiene fuerza pública para cuidar las regiones más golpeadas por esta violencia.

Puede tratarse de una modalidad de masacre continuada porque, aunque esas muertes se producen una a una, una a la vez, cada tres o cuatro días, en promedio de tiempo, desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 a la fecha, pasan de doscientos ochenta, los dirigentes sociales asesinados. Solo en el último año, han sido eliminados 162.

De la misma manera, el número de integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC, pasa de los 120 a la fecha. Cifras inquietantes y que exigen algo más que sistemas de escoltas y chalecos anti balas.

Los territorios donde con mayor intensidad se presenta el exterminio de líderes sociales, son precisamente los mismos donde tiene ocurrencia una confrontación armada de grupos ilegales o donde hace presencia la fuerza pública por razón de la situación del conflicto armado. Antioquia, Cauca, Nariño, Catatumbo y Valle, son las regiones más golpeadas por ese flagelo del narcotráfico, los cultivos ilícitos o el tránsito de precursores.

Otro hecho sobre el cual se advierte el incremento de las muertes está asociado con la cercanía del proceso electoral. La época electoral exacerba la violencia en los lugares donde reina el narcotráfico. ¿Será que tiene algo que ver el narcotráfico con el proceso político en el país o en algunas regiones?

Puede decirse que el narcotráfico es la causa principal de las muertes de estos individuos y en general, de la violencia en esas regiones. Y puede entenderse que el fenómeno de violencia no cesará mientras los factores que la determinan no sean atendidos. Es la razón por la cual se requiere una política que no atienda solo el tema

de los chalecos antibalas o el asunto de los escoltas y las consabidas recomendaciones con las cuales escurre el bulto el gobierno a la hora de responder por esas fallas serias en materia de seguridad.

El Estado tiene tareas urgentes por emprender en materia de cultivos ilícitos, sustitución y alternativas a los campesinos pobres, pero también tiene tareas en materia de mejoramiento de infraestructura y temas de seguridad ciudadana y prevención general para que no sean simples paños de agua tibia.

Guillermo E Arismendy D.
Director de INEPAZ.